

3. MARCO LEGAL E INSTITUCIONAL

3.1. Introducción

Se presentan a continuación los cuerpos normativos generales existentes en las administraciones (nacional, provincial y municipal) con jurisdicción en el tramo del Ferrocarril Roca donde se realizará la obra del viaducto, en la provincia de Buenos Aires.

Se enumeran y analizan las principales normas existentes en aspectos ambientales, sociales y de higiene y seguridad, que puedan tener vinculación con la implementación del Proyecto en todas sus fases.

Posteriormente se describe el marco institucional dentro del cual se inscribe el Proyecto.

3.2. Convenios Internacionales

Con relación al marco legal ambiental, existen diversos instrumentos internacionales que obligan a la República Argentina a cumplir con determinados preceptos y previsiones, asumidos desde la ratificación de Tratado o Convención y su aprobación por Ley del Congreso Nacional (BID, 2013c).

Entre los principales Convenios que deben tomarse en cuenta en el subsector de transporte ferroviario se menciona los siguientes:

- Convención sobre Cambio Climático (ratificado por ley 24.295).
- Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes (ratificado por ley 26.011)
- Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural de la UNESCO.
- Convenio sobre Diversidad Biológica
- Convenio de Basilea para el tránsito internacional de residuos peligrosos
- Convenio de Róterdam sobre productos químicos peligrosos

El derecho internacional condiciona el derecho interno de la Argentina una vez que los acuerdos o convenciones son aprobados y ratificados por el país a través de leyes que los internalizan.

3.3. Marco legal nacional

3.3.1. Constitución Nacional

La Constitución Nacional Argentina, reformada en 1994, ha incorporado el derecho de todos los habitantes a gozar de un ambiente sano y el deber de preservarlo. Si bien sólo un artículo trata en forma específica el tema ambiental, sus disposiciones complementarias son lo suficientemente amplias como para lograr un marco de protección del medio ambiente, creando obligaciones a todos los habitantes, y en especial a quienes desarrollan actividades susceptibles de impactar en el ambiente.

Entre los artículos a considerar en relación al presente EsIAyS se deben mencionar, el artículo 41, que garantiza el derecho a un ambiente sano, el artículo 43, referido al derecho a presentar Recursos de Amparo, y el artículo 124, que hace referencia al dominio de los recursos naturales en jurisdicciones provinciales.

Así, el artículo 41 en su primer párrafo establece que *"todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo"*. Este artículo introduce el concepto de desarrollo sustentable, señalando en forma clara la protección de los derechos de las generaciones futuras e introduce disposiciones aplicables a quienes ocasionen un daño al ambiente, señalando la recomposición del daño ambiental perpetuado.

En el segundo párrafo del artículo 41, la Constitución contiene en forma específica las obligaciones del Estado en materia ambiental *"Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica y a la información y educación ambientales"*. El artículo además de establecer las obligaciones del Estado en cuanto a la protección y preservación de los recursos naturales, el patrimonio cultural y la diversidad biológica, le ordena el cumplimiento de dos obligaciones esenciales que se complementan entre sí para poder lograr la participación ciudadana, pues impone la obligación de educar a la población y brindar la información ambiental que posea. El último párrafo del artículo 41 establece la prohibición del ingreso al territorio nacional de residuos actual o potencialmente peligrosos y de los radiactivos.

Como garantía Constitucional, y a los fines de lograr el cumplimiento efectivo de los derechos receptados en el artículo 41 antes enunciados, el Constituyente instituyó en el artículo 43 la Acción de Amparo, de la siguiente forma: *"Contra todo acto u omisión de las autoridades públicas o particulares, que en forma actual o inminente lesione, restrinja, altere o amenace con arbitrariedad e ilegalidad manifiesta, derechos y garantías reconocidos por la Constitución, un Tratado, o una Ley, podrá interponerse acción de amparo. En cuanto al derecho al ambiente, podrá interponerla tanto el afectado, como el Defensor del Pueblo, como aquellas asociaciones que propendan a esos fines, debidamente registradas conforme lo establecido por la Ley."*

La Constitución Argentina, en su artículo 124 afirma que el dominio originario de los recursos naturales pertenece a las provincias. En consecuencia, y considerando que quien detenta el dominio de los recursos naturales es quien debe ejercer la jurisdicción ambiental, se infiere que las provincias son quienes ejercen jurisdicción y retienen el poder de policía en materia ambiental conforme lo determina el artículo 75 inc. 30 de la Constitución Nacional.

3.3.2. Normativa ambiental nacional

La Constitución de 1994 encarga a la Nación el dictado de normas que contengan los presupuestos mínimos de protección del ambiente y a las provincias el dictado de las normas necesarias para complementarlas, sin que las primeras alteren las jurisdicciones locales.

En lo que hace estrictamente a la legislación ambiental, se deben mencionar las normas de presupuestos mínimos de protección ambiental relacionadas con la obra ferroviaria, que han sido sancionadas y publicadas hasta el presente:

- » *Ley 25.612 de Presupuestos Mínimos para la Gestión de los Residuos Industriales y de Actividades de Servicio, publicada el 3 de julio de 2002.*
- » *Ley 25.675 General del Ambiente, publicada el 28 de noviembre de 2002.*
- » *Ley 25.688 de Presupuestos Mínimos que aprueba el Régimen de Gestión Ambiental de las Aguas, publicada el 3 de enero de 2003.*
- » *Ley 25.831 de Presupuestos Mínimos de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, publicada el 26 de noviembre de 2003.*
- » *Ley 25.916 de Presupuestos Mínimos de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios, publicada el 7 de septiembre de 2004.*

En cuanto a la naturaleza jurídica de estas normas, se dice que las Leyes de presupuestos mínimos son dictadas para regir en todo el territorio de la nación, pero no son federales, sino que podrían resultar asimilables en cierta forma a las leyes de fondo enunciadas en el artículo 75 inciso 12 de la Constitución Nacional (Código Civil, Penal, Comercial, de Minería, etc.), lo que permite que las Provincias las reglamenten en forma directa sin alterar su letra o sancionen normas en su consecuencia respetando su contenido, pero pudiendo ser más exigentes.

- » **Ley 25.612/02. Ley de Gestión de los Residuos Industriales y de Actividades de Servicio**

La Ley de Gestión de los Residuos Industriales y de Actividades de Servicio, señala la necesidad de "garantizar la preservación ambiental, la protección de los recursos naturales, la calidad de vida de la población, la conservación de la biodiversidad, y el equilibrio de los ecosistemas; minimizar los riesgos potenciales de los residuos en todas las etapas de la gestión integral; reducir la cantidad de los residuos que se

generan; promover la utilización y transferencia de tecnologías limpias y adecuadas para la preservación ambiental y el desarrollo sustentable; y promover la cesación de los vertidos riesgosos para el ambiente” (art. 4).

En su art. 12 establece que *“los generadores deberán presentar periódicamente una declaración jurada en la que se especifiquen los datos identificatorios y las características de los residuos industriales.”**

» **Ley 25.675/02. Ley General del Ambiente**

La Ley General del Ambiente, que responde al artículo 41 de la Constitución Nacional, *“establece los presupuestos mínimos para el logro de una gestión sustentable y adecuada del ambiente, la preservación y protección de la diversidad biológica y la implementación del desarrollo sustentable”* (art. 1). Define como objetivo una gestión sustentable y adecuada del ambiente, su preservación; la protección de la biodiversidad y la implementación del desarrollo sustentable, y establece también diez principios de la política ambiental: *congruencia, prevención, precautorio, equidad intergeneracional, progresividad, responsabilidad, subsidiariedad, sustentabilidad, solidaridad y cooperación*. Señala también los objetivos y principios que deberá seguir la política ambiental nacional y da intervención al Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA).

La Ley General del Ambiente regló en su artículo 6 que *“se entiende por presupuesto mínimo, establecido en el artículo 41 de la Constitución Nacional, a toda norma que concede una tutela ambiental uniforme o común para todo el territorio nacional, y tiene como objeto imponer condiciones necesarias para asegurar la protección ambiental. En su contenido debe prever las condiciones necesarias para garantizar la dinámica de los sistemas ecológicos, mantener su capacidad de carga, y en general asegurar la preservación ambiental y el desarrollo sustentable”*. Asimismo, instituye y define una serie de instrumentos de política y gestión ambiental, tales como el ordenamiento ambiental del territorio, la evaluación de impacto ambiental, el sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas, la educación ambiental, el sistema de diagnóstico e información ambiental y el régimen económico de promoción del desarrollo sustentable.

Con relación al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, la ley establece en su art. 11 que *“toda obra o actividad que, en el territorio de la Nación, sea susceptible de degradar el ambiente, alguno de sus componentes, o afectar la calidad de vida de la población, en forma significativa, estará sujeta a un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, previo a su ejecución.”*

* Cabe señalar que pese a la sanción de esta ley está vigente la Ley 24.051/91 de Residuos Peligrosos, ya que si ambas contienen una estructura y naturaleza diferente, regulan la misma actividad de generación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos peligrosos o provenientes de la industria y de actividades de servicio. Hasta que no se concreten las condiciones establecidas por el art. 60 de la Ley 25.612, y se derogue el veto contenido en el Decreto 1343/02, se considera operativa y vigente la Ley 24.051.

Por su parte en el art. 12 establece que *"Las personas físicas o jurídicas darán inicio al procedimiento con la presentación de una declaración jurada, en la que se manifieste si las obras o actividades afectarán el ambiente. Las autoridades competentes determinarán la presentación de un estudio de impacto ambiental, cuyos requerimientos estarán detallados en ley particular y, en consecuencia, deberán realizar una evaluación de impacto ambiental y emitir una declaración de impacto ambiental en la que se manifieste la aprobación o rechazo de los estudios presentados."*

Finalmente, en su art. 13 establece que *"Los estudios de impacto ambiental deberán contener, como mínimo, una descripción detallada del Proyecto de la obra o actividad a realizar, la identificación de las consecuencias sobre el ambiente, y las acciones destinadas a mitigar los efectos negativos."*

El artículo 27 define el daño ambiental de incidencia colectiva y el artículo 28 establece la recomposición del daño ambiental.

Su artículo 22 establece que todo quien que realice actividades riesgosas para el ambiente debe contratar un seguro. A tales efectos se precisó las actividades industriales que quedan alcanzadas por esa obligación, especificando cuáles son las más riesgosas de acuerdo a su complejidad. Se establecieron tres niveles, que responden a partir de un puntaje, a factores relacionados con los efluentes residuales, el riesgo, el sistema de gestión ambiental, sustancias particularmente peligrosas, el rubro, la localización y la dimensión de las empresas. Posteriormente En el caso de las industrias identificadas en el segundo y tercer nivel (mediana y alta complejidad ambiental), están alcanzadas por el deber de contratar el seguro ambiental. También se habilita a las autoridades locales a incluir en los niveles pasibles de seguro a establecimientos con puntaje inferior, teniendo en cuenta variables como por ejemplo la vulnerabilidad del lugar de emplazamiento (sitio muy urbanizado, cercanías a fuentes de agua o lugares protegidos, etc.).

El decreto reglamentario 1638/2012 en su art. 1 establece que *"...a fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 22 de la Ley 25.675, se podrán contratar DOS (2) tipos de seguros: a) Seguro de Caución por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva. b) Seguro de Responsabilidad por Daño Ambiental de Incidencia Colectiva"*. La Resolución 177/07 aprueba normas operativas para la contratación de seguros previstos por el artículo 22 de la Ley 25.675 y en su Anexo I establece las actividades que se consideran riesgosas para el ambiente en cuanto verifiquen los niveles de complejidad ambiental identificados como categorías 2 ó 3 del Anexo II (mediana o alta complejidad ambiental, respectivamente), entre las que se encuentran, por ejemplo: *"...Grandes obras de infraestructura (cloacas, saneamiento, obras viales y otros)"*.

En este marco, la Contratista deberá acreditar la constitución del Seguro Ambiental Obligatorio. El Seguro Ambiental Obligatorio deberá encontrarse vigente durante todo el Contrato. Se encontrarán cubiertos todos los siniestros cuya causa haya acontecido y se haya denunciado durante la vigencia de la póliza.

» **Ley N° 25.688/03. Ley de Gestión Ambiental de las Aguas**

Por su parte, la Ley de Gestión Ambiental de las Aguas establece "los presupuestos mínimos ambientales, para la preservación de las aguas, su aprovechamiento y uso racional" (art. 1), mientras que en su art. 6 señala que "para utilizar las aguas objeto de esta ley, se deberá contar con el permiso de la autoridad competente (...)".

» **Ley N° 25.831/04. Ley de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental**

En cuanto a la Ley de Libre Acceso a la Información Pública Ambiental, establece "los presupuestos mínimos de protección ambiental para garantizar el derecho de acceso a la información ambiental que se encontrare en poder del Estado, tanto en el ámbito nacional como provincial, municipal y de la Ciudad de Buenos Aires, como así también de entes autárquicos y empresas prestadoras de servicios públicos, sean públicas, privadas o mixtas." Señala que "el acceso a la información ambiental será libre y gratuito para toda persona física o jurídica, a excepción de aquellos gastos vinculados con los recursos utilizados para la entrega de la información solicitada" (art. 3). Cabe acotar que "se considerarán infracciones a esta ley, la obstrucción, falsedad, ocultamiento, falta de respuesta en el plazo establecido en el artículo anterior, o la denegatoria injustificada a brindar la información solicitada, y todo acto u omisión que, sin causa justificada, afecte el regular ejercicio del derecho que esta ley establece" (art. 9).

» **Ley N° 25.916/04. Ley de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios**

En cuanto a la Ley de Gestión Integral de Residuos Domiciliarios 25.916, establece "los presupuestos mínimos de protección ambiental para la gestión integral de los residuos domiciliarios, sean éstos de origen residencial, urbano, comercial, asistencial, sanitario, industrial o institucional, con excepción de aquellos que se encuentren regulados por normas específicas" (art. 1). Señala que la disposición de residuos domiciliarios deberá efectuarse mediante métodos apropiados "que prevengan y minimicen los posibles impactos negativos sobre el ambiente y la calidad de vida de la población."

A las mismas, se agregan leyes de carácter ambiental tales como la ley N° 25.743/03, de **Protección del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico**, que establece como objeto en su art. 1 la "preservación, protección y tutela del Patrimonio Arqueológico y Paleontológico como parte integrante del Patrimonio Cultural de la Nación y el aprovechamiento científico y cultural del mismo."

Asimismo, se deben considerar los contenidos de las leyes 24.028/91 de **Accidentes y Riesgo Laboral** y los objetivos de la ley 24.557/95 de Riesgos del Trabajo, entre los cuales están: "a) Reducir la siniestralidad laboral a través de la prevención de los riesgos derivados del trabajo; b) Reparar los daños derivados de accidentes de trabajo y de enfermedades profesionales, incluyendo la rehabilitación

del trabajador damnificado; c) Promover la recalificación y la recolocación de los trabajadores damnificados; d) Promover la negociación colectiva laboral para la mejora de las medidas de prevención y de las prestaciones reparadoras". Esta ley, en su art. 2 define como ámbito de aplicación a "a) Los funcionarios y empleados del sector público nacional, de las provincias y sus municipios y de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires; b) Los trabajadores en relación de dependencia del sector privado; c) Las personas obligadas a prestar un servicio de carga pública."

Además se considera la ley N° 24.051 de **Residuos Peligrosos**, la cual se considera que produjo a nivel nacional un cambio sustancial en materia jurídica, en cuanto a la gestión de los privados y de los organismos públicos competentes, respecto a los residuos peligrosos. En el Anexo I de la Ley se enumera una lista de 45 residuos peligrosos; y en el Anexo II se presenta las características de peligrosidad. El Decreto 831/93, por su parte, establece en los Anexos categorías de control y listados de características peligrosas. Cabe señalar que las sustancias incluidas en ambos anexos de la Ley son absolutamente coincidentes con las enumeradas en el Convenio de Basilea sobre el Control de los Movimientos Transfronterizos de los Desechos Peligrosos y su Eliminación aprobado por Argentina mediante Ley 23.922/91.

Por su parte, la ley 20.284/73, de **Calidad de aire**, si bien aún no está reglamentada, contiene las "*Normas para la Preservación de los Recursos del Aire*" para todas las fuentes capaces de producir contaminación atmosférica ubicadas en jurisdicción federal. Entre los puntos más sobresalientes de esta Ley están: el ámbito de su aplicación, que son todas las fuentes de contaminación atmosférica ubicadas en jurisdicción federal y en las provincias que deseen adherirse; y la autoridad de aplicación que está constituida por las autoridades sanitarias nacional, provincial y de la Ciudad de Buenos Aires, en sus respectivas jurisdicciones.

En relación a los temas de seguridad e higiene en el trabajo la ley 19.587/72 de **Higiene y Seguridad en el Trabajo**, y sus decretos reglamentarios determinan las condiciones de seguridad que debe cumplir cualquier actividad industrial a nivel nacional a fin de proteger a los trabajadores y disminuir los riesgos a los que están expuestos. Así su art. 4 establece que "*La higiene y seguridad en el trabajo comprenderá las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto: a) proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores; b) prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo; c) estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral.*" A su vez establece la obligación de contar con un Servicio de Higiene, Seguridad y Medicina Laboral, a través de profesionales competentes en Seguridad y Medicina del Trabajo.

En cuanto a otros tipos de normativa, la **Resolución 911/96 de Salud y Seguridad en la Construcción**, comprende las normas técnicas y medidas sanitarias, precautorias, de tutela o de cualquier otra índole que tengan por objeto

proteger la vida, preservar y mantener la integridad psicofísica de los trabajadores; prevenir, reducir, eliminar o aislar los riesgos de los distintos centros o puestos de trabajo y estimular y desarrollar una actitud positiva respecto de la prevención de los accidentes o enfermedades que puedan derivarse de la actividad laboral.

Por otro lado, la **Resolución 463/09**, en su art. 11 establece que *"las ART deberán visitar al empleador a fin de verificar el estado de cumplimiento de la normativa de salud y seguridad en el trabajo, conforme Formularios de Estado de Cumplimiento de la Normativa Vigente del establecimiento..."*. El art. 12 establece que *"las ART deberán declarar, dentro del plazo de diez días corridos contados desde el vencimiento del plazo indicado por el artículo 10 de la presente resolución, en el Registro de Cumplimiento de Normas de Salud y Seguridad en el Trabajo, los datos que les fueran suministrados por los empleadores o profesional/es matriculado/s al momento de suscribir la solicitud de afiliación respecto del nivel de cumplimiento de las normas de salud, higiene y seguridad laboral aplicables a la actividad que desarrolla, el programa anual de prevención de riesgos laborales presentado por el empleador, las observaciones realizadas y la fecha de verificación de cumplimiento del mismo"*.

Asimismo, es necesario para este proyecto considerar normativa que establece el marco general en materia ferroviaria, entre las que se destacan la Ley 26.352/08 (y el Dec. 752/08 del Poder Ejecutivo Nacional) de creación de la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIF SE) y de la Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE), estableciendo las funciones, competencias, y ámbitos de actuación de las mismas. En relación a ello, mediante la Resolución 1.413/08 del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, se estableció *"la transferencia a ADIF SE del patrimonio ferroviario, en jurisdicción del Organismo Nacional de Administración de Bienes (ONAB), organismo desconcentrado en la órbita de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, el cual se encuentra compuesto por los bienes muebles e inmuebles de origen ferroviario (...)"*. Por último, cabe destacar el Decreto 874/12 (PEN) de creación del Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, del cual depende al día de la fecha la Secretaría de Transporte de la Nación. Mediante el Decreto N° 875/12 (PEN), *"se modifica el Organigrama de aplicación de la Administración Pública Nacional, en la parte correspondiente a los Ministerios del Interior y Transporte y de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, a fin de adecuarlo al decreto por el que se creó la cartera ministerial citada en primer término (Dec. 874/12)"*.

3.4. Marco legal provincial

La obra ferroviaria se inscribe íntegramente dentro de la zona de vía del ferrocarril Roca, dentro de la jurisdicción de la Provincia de Buenos Aires. La Provincia cuenta con normativa aplicable a las obras de infraestructura dentro de la jurisdicción. Su autoridad ambiental, es el OPDS, encargada de emitir el Certificado de Aptitud Ambiental de las obras que se desarrollen dentro del territorio provincial, cuya

categorización determine el requerimiento de la realización y presentación de un Estudio de Impacto Ambiental y su aprobación por ella.

3.4.1. Constitución de la Provincia de Buenos Aires

La Constitución de la Provincia de Buenos Aires, en su art. 28, establece que sus habitantes tienen el derecho a gozar de un ambiente sano y el deber de conservarlo y protegerlo en su provecho y en el de las generaciones futuras.

De acuerdo a la Constitución, la Provincia ejerce el dominio sobre el ambiente y los recursos naturales de su territorio incluyendo el subsuelo y el espacio aéreo correspondiente, el mar territorial y su lecho, la plataforma continental y los recursos naturales de la zona económica exclusiva, con el fin de asegurar una gestión ambientalmente adecuada.

Asimismo en su art. 28 establece que deberá *"controlar el impacto ambiental de todas las actividades que perjudiquen el ecosistema; promover acciones que eviten la contaminación del aire, agua y suelo (...). Asimismo, asegurará políticas de conservación y recuperación de calidad de agua, aire y suelo compatible con la exigencia de mantener su integridad física y su capacidad productiva, y el resguardo de áreas de importancia ecológica, de la flora o de la fauna"*.

3.4.2. Normativa ambiental provincial

En lo que se refiere al ambiente en general, y en referencia a normas específicas, se cuenta con la **Ley 11.723/95 (modificada por Ley N° 13.516)**, sobre Recursos Naturales y Medio Ambiente.

Si bien no está reglamentada en su totalidad, en su art.1, define que la presente ley, conforme el artículo 28 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, tiene por objeto la protección, conservación, mejoramiento y restauración de los recursos naturales y del ambiente en general en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, a fin de preservar la vida en su sentido más amplio; asegurando a las generaciones presentes y futuras la conservación de la calidad ambiental y la diversidad biológica.

El art. 2, garantiza a todos los habitantes de la Provincia de Buenos Aires, los siguientes derechos:

- a) a gozar de un ambiente sano, adecuado para el desarrollo armónico de la persona,
- b) a la información vinculada al manejo de los recursos naturales que administre el estado,
- c) a participar de los procesos en que esté involucrado el manejo de los recursos naturales y la protección, conservación, mejoramiento y restauración del ambiente en general, de acuerdo con lo que establezca la reglamentación de la presente Ley.

Según el art. 5, el Poder Ejecutivo Provincial y los municipios garantizarán, en la ejecución de las políticas de gobierno la observancia de los derechos reconocidos en el art. 2, así como también de los principios de la política ambiental, estableciendo en su Inciso b) a que *"todo emprendimiento que implique acciones u obras que sean susceptibles de producir efectos negativos sobre el ambiente y/o sus elementos debe contar con una evaluación de impacto ambiental previa"*.

Según el art. 6, el Estado Provincial y los municipios tienen la obligación de fiscalizar las acciones antrópicas que puedan producir un menoscabo al ambiente, siendo responsables de las acciones y de las omisiones en que incurran.

El art. 7 define que en la localización de las actividades productivas de bienes y/o servicios, en el aprovechamiento de los recursos naturales y en la localización y regulación de los asentamientos humanos deberá tenerse en cuenta el ambiente global, caracterizado a través de sus componentes naturales o de las actividades humanas.

En su art. 10, define que todos los proyectos consistentes en la realización de obras o actividades que produzcan o sean susceptibles de producir algún efecto negativo al ambiente de la Provincia de Buenos Aires y/o sus recursos naturales, deberán obtener una Declaración de Impacto Ambiental (Certificado de Aptitud Ambiental) expedida por la Autoridad Ambiental provincial o municipal según las categorías que establezca la reglamentación de acuerdo a la enumeración enunciativa incorporada en el Anexo II de la citada Ley.

Asimismo, señala en el art. 22, que la Autoridad Ambiental provincial o municipal que expidió la Declaración de Impacto Ambiental (DIA), tendrá la obligación de verificar periódicamente el cumplimiento de aquéllas.

Según el art. 74, la provincia asegurará a cada municipio el poder de policía suficiente para la fiscalización y cumplimiento de las normas ambientales garantizándole la debida asistencia técnica. Según el art. 75, todo municipio podrá verificar el cumplimiento de las normas ambientales inspeccionando y realizando constataciones a efectos de reclamar la intervención de la autoridad competente. Asimismo, en caso de emergencia podrá tomar decisiones de tipo cautelar o precautorio dando inmediato aviso a la autoridad que corresponda.

El Anexo II de la citada Ley, define los Proyectos de obras o actividades sometidas al proceso de Evaluación de Impacto Ambiental por la autoridad ambiental provincial; dentro del cual se puede suscribir esta obra ferroviaria, como tipo de obra que necesita de la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental.

Por otra parte, de la misma manera que en el escenario nacional, las sucesivas normativas emergentes apuntan a la especificidad de los alcances de cada una de ellas.

A continuación se presenta en la Tabla 2 las distintas temáticas o áreas ambientales vinculadas a la obra, mencionando para cada caso la norma provincial de aplicación.

Tabla 2. Síntesis de la normativa ambiental de la provincia de Buenos Aires vinculada a la obra de construcción del viaducto en el Ferrocarril Gral. Roca (FCGR)

Componente: Aire	
Ley 5.965/98	<p>Ley de protección a las fuentes de provisión, cursos y cuerpos receptores de agua y de la atmósfera. Prohíbe todo tipo de descarga de efluentes. Delega el poder de policía a los Municipios.</p> <p>Prohíbese a las reparticiones del Estado, entidades públicas y privadas y a los particulares; el envío de efluentes residuales sólidos, líquidos o gaseosos, de cualquier origen, a la atmósfera, a canalizaciones, acequias, arroyos, riachos, ríos y a toda otra fuente, cuerpo o cuerpo receptor de agua, superficial o subterráneo, que signifique una degradación o desmedro del aire o de las aguas de la Provincia, sin previo tratamiento de depuración o neutralización que los convierta en inocuos e inofensivos para la salud de la población o que impida su efecto pernicioso en la atmósfera y la contaminación, perjuicios y obstrucciones en las fuentes, cursos y cuerpos de agua</p>
Decreto 3.395/96	Decretos Reglamentarios de la Ley 5.965/98. Complementa la Ley 5.965/98 e introduce algunas modificaciones
Decreto 2.009/60	
Resolución SPA 242/97	Resolución complementaria del Decreto 3.395/96 reglamentario en materia de efluentes gaseosos de la Ley 5.965/98. Exige la presentación de una Declaración Jurada de efluentes gaseosos, indicando técnicas de muestreo y análisis. Aplica modelos de difusión atmosférica a efluentes gaseosos.
Componente: Residuos	
Ley 11.382/92	Modifica la Ley 8.031/73 (Código de faltas) en lo referente a transporte, depósito y otros referentes a residuos
Ley 11.720/97	<p>Residuos especiales. Generación y manipulación. Esta ley regula la generación, manipulación, transporte, tratamiento y disposición final de residuos especiales en el territorio de la Provincia de Buenos Aires.</p> <p>La Ley crea, entre otras cosas: a) un Registro a ser llevado a cabo y actualizado permanentemente por la Secretaría de Política Ambiental, autoridad de aplicación de la ley de referencia; b) un Registro Provincial de Tecnología, a ser llevado a cabo también por la Autoridad de Aplicación; c) un Registro de Profesionales para el estudio de Impacto Ambiental, coincidente con el creado por la Ley 11.459 y su reglamentación; y d) un Manifiesto en el que se detalle la naturaleza y cantidad de los residuos, su origen,</p>

	transferencia del generador al transportista, y de éste a la planta de tratamiento, almacenamiento o disposición final, así como los procesos de tratamiento y eliminación a los que fueren sometidos y cualquier otra operación que respecto a los mismos se realizase.
Ley 13.592	Gestión integral de los residuos sólidos urbanos.
Decreto 806/97	Reglamenta la Ley 11.720/97. establece que la Autoridad de Aplicación será la Secretaría de Política Ambiental de la Provincia de Buenos Aires quién deberá hacer cumplir los fines de la Ley 11.720 teniendo en cuenta incentivar el tratamiento y disposición final de los residuos especiales en zonas críticas donde se encuentren radicados un gran número de generadores de residuos de esta clase y no cuenten con posibilidades de efectuar el tratamiento en sus propias plantas, provocando inminente a la población circundante y al ambiente
Resolución SPA 214/98	Determina el cálculo del nivel de complejidad ambiental de actividades industriales y no industriales
Decreto 2.181/01	Modifica la Ley 11.459/93
Componente: Ruido	
Resolución 159/96 de la SPA	Resolución complementaria de la Ley 11.175 (modificada por la Ley 11.737). Aprueba la Norma IRAM 4.062 y recomienda su aplicación por parte de todos los Municipios de la provincia. Esta norma estipula que el nivel sonoro equivalente en dBA no deberá exceder el valor de 90 dBA.
Resolución 94/02	Método de medición y clasificación de ruidos molestos al vecindario
Componente: Ordenamiento del Suelo	
Ley de Ordenamiento del Uso del Suelo 8.912/77. Texto ordenado mediante Decreto-Ley 10.128/83 y Decretos 1.549/83, 9.404/86, 3.389/87 y 1.372/88	Clasifica el territorio, regula el proceso de ocupación del mismo, la ampliación o formación de núcleos urbanos, prescribe el uso, ocupación y subdivisión del suelo, prohibiendo expresamente los usos molestos, nocivos o peligrosos, los que serán localizados en zonas especiales (art. 30).
Componente: Agua	
Ley 12.257. Código de Aguas de la Provincia de Buenos Aires	Este código establece la protección, conservación y manejo del recurso hídrico. Comprende la planificación hidrológica, emergencias hídricas, vedas sanitarias, el inventario físico del agua, así como la fijación de la línea de ribera. Establece

	distintos usos con sus correspondientes permisos y concesiones. Estos usos se discriminan en: agropecuario, industrial, recreativo, deportivo y de esparcimiento, así como también para el uso energético, minero, piscícola, para la flotación y navegación y el uso del agua con propiedades terapéuticas, medicinales y termales.
Componente: Pasivos Ambientales	
Ley 14.343/12. Pasivos ambientales.	Surge de la obligación de recomponer por parte del responsable, causante del daño, aquellos sitios contaminados con el objeto sanearlos. La auditoría de cierre o de transferencia es un instrumento técnico, utilizado toda vez que un establecimiento cesa sus actividades o en caso de transferir la firma.
Componente: Biodiversidad	
Ley 12.704/01. Paisaje Protegido o Espacio Verde de Interés Provincial.	Aquellas áreas naturales o antropizadas con valor escénico, científico, sociocultural, ecológico u otros, conformadas por elementos de la fauna y la flora autóctona y/o exótica pueden ser declarados "paisajes protegidos", y aquellas áreas urbanas o periurbanas forestadas o no, con fines ambientales, recreativos, educativos, eco-turísticos o urbanísticos pueden ser declarados "espacios verdes". Ambas declaraciones previamente deben contar con un estudio ambiental que justifique tal declaración. Estas áreas si bien son declaradas de interés por ley provincial, el ámbito de aplicación son los municipios donde se encuentran y gozan de su protección, conservación, control y fiscalización y planes de manejo.
Ley 12.276/99. Arbolado Urbano	Trata sobre la forestación urbana o rural con especies arbóreas o arbustivas en lugares de uso público. Se implementa a través de los municipios quienes anualmente deben establecer un plan de forestación en el que incluirán poda, tala, extracción de ejemplares, así como un plan regulador de arbolado en el que se incluya: forestación, reforestación acompañadas de un plan de manejo y conservación.
Otros temas	
Ley 13.596/06. Audiencias Públicas	Establece el procedimiento que deberá observarse en la realización de las Audiencias Públicas convocadas por el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo de la Provincia.
Decreto Ley 6.769/58, Ley Orgánica de las Municipalidades.	Esta ley regula la radicación, habilitación y funcionamiento de los establecimientos comerciales e industriales en el ámbito municipal en todo el territorio provincial. De acuerdo a esta ley los municipios son también los encargados de la

	prevención de la contaminación ambiental de los cursos de agua y de asegurar la conservación de los recursos naturales en el ámbito de su jurisdicción.
--	---

Fuente: elaboración propia en base al Digesto normativo provincia[†]

3.5. Marco legal del Municipio de La Plata

La Municipalidad de La Plata cuenta con normativa dentro de su jurisdicción vinculada con diferentes aspectos ambientales y sociales, muchos de ellos relacionados con obras de infraestructura como la construcción del nuevo viaducto en el Ferrocarril Roca.

Entre ellas, se destacan los siguientes Decretos y Ordenanzas:

Ordenanza N° 10.703/11. Código de Ordenamiento Urbano. Se crea el Código de Ordenamiento Urbano de la Municipalidad de La Plata, entre cuyos contenidos se destacan el Título II referido al "Ordenamiento del Territorio", y mediante el cual se establece una zonificación de usos del suelo dentro del área urbana y rural, y Título IV "Usos del Suelo", el cual clasifica entre usos permitidos, tolerados, prohibidos o no consignados, dentro del Partido.

Ordenanza N° 10.661/09. Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos. Crea el "Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos", que tiene por objeto la educación, información y capacitación ciudadana en todos los ámbitos públicos y privados sobre el tratamiento y disposición final de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU), para su óptima gestión, así como la minimización y separación en origen; la recuperación, el reciclado y/o el compostaje de los RSU, debiendo ser recolectados en vehículos aptos para tal fin. La Agencia Ambiental Municipal es la Autoridad de Aplicación del Programa de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, teniendo por obligación y facultades, instrumentar todos los medios necesarios para el funcionamiento del programa, su operatividad y mejoramiento continuo, su cargo el control y seguimiento, y la planificación de objetivos de corto, mediano y largo plazo.

Ordenanza N° 10.462/08. Creación de la Agencia Ambiental La Plata. Crea la "Agencia Ambiental La Plata" para la organización y competencias en materia de Política y Control Ambiental, bajo la modalidad de organismo descentralizado. La misma tiene como objeto proteger la calidad ambiental a través de la planificación, programación y ejecución de las acciones necesarias para cumplir con la Política Ambiental de la Ciudad de La Plata. Entre las herramientas para la gestión ambiental se cuentan: el sistema de control sobre el desarrollo de las actividades antrópicas, y la evaluación del impacto ambiental. Asimismo, entre sus atribuciones y funciones, se cuentan la de proponer políticas y diseñar planes, programas y proyectos tendientes a mejorar y preservar la calidad ambiental de la Ciudad, así

[†] Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS). Disponible en: <http://www.opds.gba.gov.ar/index.php/leyes/resumen> (consultado en febrero de 2014)

como hacer cumplir las normas en materia de regulación y control del ambiente de la Ciudad de La Plata.

Ordenanza N° 9.880. Código de Espacio Público. En su art. 10 especifica que "*a los fines de la regulación específica de la presente Ordenanza se adoptan, conforme el Plan de Manejo del Sitio (Ord.9232) tres Zonas: i.) Del Casco Fundacional: Comprende el espacio urbano público definido por: la Av. 122, 72, 32, y 31 en las que se desarrolla el parque lineal de Circunvalación; ii) De Amortiguación: comprende el espacio urbano público de las localidades de: Tolosa -San Carlos- Los Hornos-Villa Elvira y San Lorenzo; iii) Del Eje Noroeste y Centros de Servicio Rural: comprende las localidades de: Melchor Romero -Olmos - Abasto - A. Seguí - Etcheverry - Ringuet -Gonnet - City Bell- Villa Elisa.*"

Según esta Ordenanza, la zona comprendida por aquellos barrios periféricos a la ciudad, llamada Zona de Amortiguación, Ringuet, Tolosa forman parte de esta caracterización.

Asimismo, en los artículos 46 y 47 define qué se entiende por "Parque Lineal" en bordes de arroyos o vías férreas. El art. 46 señala que se entiende "*por 'Parque Lineal' a los espacios verdes, con predominio de la dimensión longitudinal, continuo a modo de vía verde y contiguo a cursos de agua, en el que solo podrán admitirse intervenciones que aporten y contribuyan a la conservación de los aspectos naturales, paisajísticos y ecosistemas que le confieren su carácter ambiental (...)*". El art. 47, por su parte, señala que se entiende "*por 'Parque Lineal' a los espacios verdes con predominio de la dimensión longitudinal, continua a modo de vía verde y contigua a vías del ferrocarril y canales de circulación vehicular.*"

Ordenanza N° 9.790/04. Cavas y canteras. Su art. 1 establece que "*las empresas que realicen las actividades extractivas de suelos y los titulares de los dominios de cavas y de canteras abandonadas deberán cumplir con los siguientes requisitos: i) rodear el predio con un alambrado olímpico, cuya altura sea superior a los 2,1 m, que impida el acceso a personas sin autorización; ii) colocar carteles de prevención que indiquen la proximidad de la excavación en los accesos de personas y equipos; iii) custodiar el predio y sus accesos con personal de vigilancia privado durante las 24 hs debidamente registrada y habilitada.*"

Ordenanza N° 9.207/00. Audiencias Públicas. Crea y regula el Instituto de Audiencia Pública, entendiendo la Audiencia Pública como "*una instancia de participación en el proceso de toma de decisión administrativa o legislativa en el cual la autoridad responsable de la misma habilita un espacio institucional para que todos aquellos que puedan verse afectados o tengan un interés particular expresen su opinión respecto de ella. El objetivo de esta instancia es que la autoridad responsable de tomar la decisión acceda a las distintas opiniones sobre el tema en forma simultánea y en pie de igualdad a través del contacto con los interesados.*"

Ordenanza N° 7.845/91. Ruido y vibraciones. Regula las acciones municipales para la protección del medio ambiente contra las perturbaciones producidas por ruidos y vibraciones en el Partido de La Plata. Esta Ordenanza "*es de obligatorio*

cumplimiento en el desarrollo de cualquier actividad, actual o proyectada, cuyo ejercicio o uso conlleve la producción de ruidos y/o vibraciones, cualquiera sea su titular, promotor o responsable, ya sea que se efectúe en lugar público, o privado, abierto o cerrado.” Según la normativa “todo trabajo de planeamiento urbano, de organización o regulación de actividades y servicios que realice la Municipalidad, deberá incorporar un análisis del impacto ambiental de los ruidos y vibraciones asociados, a fin de que las modificaciones introducidas proporcionen un nivel más elevado de calidad ambiental.” Asimismo, establece los siguientes niveles de referencia en zonas residenciales: 50 dBA (horario diurno), 45 dBA (horario nocturno) y 40 dBA (feriados). Según la norma, “todos los establecimientos o lugares donde se desarrollen o proyecten desarrollar actividades públicas o privadas dentro del Partido de La Plata, poseerán habilitación o autorización de funcionamiento sujetos al cumplimiento de los niveles de emisión sonora indicados en los Artículos 5 y 6 para las zonas que delimite la reglamentación.” (art. 8). Respecto a los vehículos de tracción mecánica, señala que “deberán tener en condiciones adecuadas al funcionamiento: motor, transmisión, carrocería, frenos y demás elementos capaces de producir ruidos y vibraciones, a fin de que el nivel sonoro emitido por el vehículo al circular no supera los límites establecidos por la Ordenanza” (en ningún caso, superior a 90 dBA). En cuanto a las vibraciones, las máquinas que puedan provocar vibraciones deberán estar montadas sobre base o fundaciones convenientemente calculadas y deberán estar aisladas de terreno y/o piso mediante interposición de materiales que amortigüen movimientos o impactos.

Ordenanza N° 7.362/89. Extracción de suelos. Regula las actividades de extracción de suelos en La Plata. En su artículo 19, detalla el régimen impositivo al que quedan sujetas *“las extracciones de suelo (tierra, tosca, arcilla, suelo seleccionado) (...) de acuerdo a los metros cúbicos de suelo in situ que hayan sido extraídos.”* Por otra parte, el art. 29 señala que *“en la etapa de habilitación intervendrán sucesivamente la Dirección de Industria y Comercio, la Subdirección de Catastro, la Dirección de Planeamiento y la Dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales. En la etapa de control de explotación hasta el cese de la actividad intervendrán sucesivamente la dirección de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Subdirección de Catastro y la Subdirección Impositiva. En la etapa de cese de la explotación intervendrán la Dirección de Medio Ambiente y la Dirección de Industria y Comercio.”*

Decreto N° 1.099/05. Creación de la Unidad de Coordinación de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos. Ante la necesidad de adecuar la estructura orgánico funcional en relación con la gestión de residuos sólidos urbanos que lleva adelante la Municipalidad, mediante este Decreto se creó la Unidad de Coordinación de Gestión de Residuos Sólidos Urbanos, dependiente de la Dirección Gestión Integral de Residuos y Medio Ambiente, dependiente de la Subsecretaría de Planeamiento y Desarrollo Urbano de la Secretaría de Gestión Pública, cuyas misiones y funciones se consignan en el Anexo I del Decreto.

3.6. Marco legal del Municipio de Ensenada

La Municipalidad de Ensenada cuenta con normativa dentro de su jurisdicción vinculada con diferentes aspectos ambientales y sociales, algunos relacionados con obras de infraestructura como la construcción del nuevo viaducto en el Ferrocarril Roca.

Entre ellas, se destacan las siguientes ordenanzas:

Ordenanza N° 1.946/96. El Dpto. Ejecutivo Municipal, a través de la Dirección de Promoción y Protección de Medio Ambiente, fija las acciones a implementar que garanticen un adecuado y efectivo seguimiento de las emanaciones en todas sus formas, provenientes de las empresas radicadas en el Partido.

Ordenanza N° 2.154/98. Establece que todos los ocupantes o propietarios a cualquier título, de predios y/o inmuebles urbanos o rurales, están obligados al exterminio de las especies declaradas nocivas como así también, a adoptar las medidas preventivas para evitar su desarrollo y propagación (ratas, lauchas, mosquitos, vinchucas, cucarachas, etc.).

Ordenanza N° 2.479/00. Aprueba el Plano de uso del Suelo en el Partido de Ensenada, incluyendo la zonificación respectiva y los indicadores urbanísticos.

Ordenanza N° 2.577/00. Crea en el ámbito de Ensenada, un Plan de "Selección, Reciclado y/o Compostaje de Residuos Sólidos Urbanos."

Ordenanza N° 2.915/03. Establece la regulación del procedimiento tendiente a lograr la participación social en la Evaluación del Impacto Ambiental, señalando que el Municipio asegurará el derecho a la información y difusión de la misma.

En su art. 2, señala que *"el Municipio pondrá en conocimiento del Honorable Concejo Deliberante todo emprendimiento público o privado que pudiere comprometer el medio ambiente con el objeto de contribuir a la evaluación del impacto ambiental."*

El art. 3, establece que *"iniciado el trámite conforme a lo dispuesto en los artículos anteriores tomará intervención la Comisión de Higiene y Recursos Naturales, quien podrá convocar a Audiencias Públicas con participación comunitaria, como también requerir informes ante quien corresponda."* Asimismo, según el art. 4, *"el Municipio asegurará el derecho a la información de los vecinos con relación a emprendimientos encuadrados en la presente Ordenanza, poniendo a su disposición toda la información existente sobre el particular."*

Ordenanza 3.942/11 y Ord. 4000/12. Mediante estas Ordenanzas se definen indicadores urbanísticos que permiten un mejor aprovechamiento de las superficies edificables en los lotes urbanos de las localidades de El Dique y Ensenada.

3.7. Marco institucional

3.7.1. Instituciones nacionales

A través de un acuerdo entre el Ministerio del Interior y Transporte de la Nación, y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que presta el apoyo financiero, se ejecuta el "*Programa de Recuperación de Ferrocarriles Metropolitanos (PRFM)*" bajo la modalidad de crédito "*Conditional Credit Line for Investment Projects (CCLIP)*".

Este Programa, cuyo objetivo general es la modernización de los servicios ferroviarios urbanos de pasajeros (tendiendo a la electrificación total del sistema, incrementando la frecuencia y los estándares de calidad, y eliminando las interferencias viales, a fin de mejorar la seguridad de los pasajeros, disminuir los tiempos de viajes, y mejorar la integración con el entorno urbano), es consistente con las prioridades del Plan Estratégico Ferroviario del Ministerio del Interior y Transporte, y constituye el instrumento más adecuado para atender las necesidades de financiamiento de corto, mediano y largo plazo. El área de aplicación del Programa es la Región Metropolitana de Buenos Aires (RMBA).

Asimismo, dados los potenciales impactos ambientales y socioculturales negativos que puede ocasionar la construcción de obras prevista dentro del Proyecto, se activa la "*Política de Medio Ambiente y de Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703)*" del BID. En este sentido, con el fin de cumplir con dichas Políticas, se acordó con el Ministerio del Interior y Transporte, a través de la Unidad Ejecutora Central (UEC), que es la instancia responsable de la ejecución y coordinación del Programa, desarrollar un "*Marco de Gestión Ambiental y Sociocultural (MGAS)*", el cual permita asegurar una adecuada gestión ambiental y sociocultural durante la implementación del Programa y cumplir con la respectiva legislación ambiental (en los distintos niveles jurisdiccionales) y las directrices emanadas de las Políticas aplicables del BID. El objetivo general del MGAS es contar con un instrumento de gestión donde, sobre la base de un diagnóstico y análisis estratégico del marco legal, institucional y de los aspectos ambientales y socioculturales, se presenta una serie de metodologías, herramientas y procedimientos de gestión socio-ambiental, con el fin de asegurar la sostenibilidad ambiental y social de los Proyectos que se financien con recursos del Programa; y cumplir con la respectiva legislación ambiental como con las Políticas y Salvaguardias Ambientales y Socioculturales del Banco.

Dentro del Programa de Recuperación de Ferrocarriles Metropolitanos (PRFM), se incluye el "Proyecto de Mejora Integral del Ferrocarril Gral. Roca: Ramal Plaza Constitución - La Plata", el cual tiene como fin contribuir a la reducción de tiempos de viajes y niveles de accidentalidad, y a la mejora de la confiabilidad y confort del servicio, incrementando como resultado la participación de este ramal ferroviario en el transporte de pasajeros del corredor Buenos Aires-La Plata.

Uno de los subcomponentes de este Proyecto es la obra de construcción del nuevo viaducto en Ringuet, la cual requiere la realización de la presente Evaluación de Impacto Ambiental y Social (EIAyS). El viaducto, objeto de la EIAyS, será construido entre Ringuet y Tolosa (entre el km 47+630 al km 49+000, aprox.). La

deformación del terraplén actual provoca alteraciones de los parámetros geométricos de las vías (nivelación transversal y longitudinal), por lo cual se decidió realizar esta obra.

En cuanto a las instituciones locales que conforman entonces el marco institucional de este proyecto, se destacan las instituciones vinculadas al transporte y el ambiente, en sus distintos niveles jurisdiccionales:

a. Ministerio del Interior y Transporte

Es competencia específica del Ministerio del Interior y Transporte, asistir al Presidente de la Nación, y al Jefe de Gabinete de Ministros, en orden a sus competencias, en todo lo inherente al gobierno político interno y al ejercicio pleno de los principios y garantías constitucionales, asegurando y preservando el régimen republicano, representativo y federal, así como en todo lo concerniente al Transporte.

Asimismo, es función del Ministerio entender en las relaciones y en el desenvolvimiento con los gobiernos de las provincias y el de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en las relaciones y cuestiones inter-jurisdiccionales y coordinar políticas que coadyuven y fomenten la formación de regiones en el territorio nacional, a los fines establecidos en el artículo 124 de la Constitución Nacional.

b. Secretaría de Transporte

La Secretaría de Transporte (ST) es una de las 5 Secretarías que componen el MIT. La ST está compuesta a su vez por 6 Subsecretarías: Transporte Automotor; Transporte Ferroviario; Transporte Aerocomercial; Puertos y Vías Navegables; Gestión Administrativa del Transporte; y Regulación Normativa del Transporte.

Entre los principales objetivos relacionados con este estudio están:

- » *Entender en la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de transporte terrestre, aerocomercial, fluvial y marítimo, y actividades portuarias y de las vías navegables, supervisando su cumplimiento y proponiendo el marco regulatorio destinado a facilitar su ejecución;*
- » *Entender en el funcionamiento de un sistema integrado de transporte elaborando las medidas y coordinando las acciones que permitan el desarrollo de los modos aéreo, terrestre, fluvial y marítimo, así como del transporte multimodal, en condiciones de eficiencia, de conformidad con la legislación y la normativa vigente. Promover los estudios y acciones que tiendan al perfeccionamiento del sistema;*
- » *Ejercer las facultades de supervisión respecto del funcionamiento de las empresas de cuyo capital social el Estado Nacional tiene participación accionaria: Ferrocarril General Belgrano S.A.; Nuevo Central Argentino S.A.; Ferroexpreso Pampeano Concesionaria S.A.; Ferrosurroca S.A.; Ferrocarril Mesopotámico*

Urquiza S.A.; Buenos Aires al Pacifico San Martin S.A.; Belgrano Cargas S.A., y Intercargo S. A. Comercial;

- » *Entender en la aprobación de los pliegos de bases y condiciones para llamados a concursos y/o licitaciones, así como también entender en los procesos licitatorios que se efectúen con motivo de las acciones vinculadas al área de su competencia;*
- » *Intervenir en las reuniones de consulta, reuniones técnicas o negociaciones con autoridades del transporte de los demás países, necesarias para la elaboración de los instrumentos de regulación del transporte con los mismos;*
- » *Intervenir en la gestión y obtención de cooperación técnica y financiera internacional, que países y organismos internacionales ofrezcan para el cumplimiento de objetivos y políticas de la Secretaría;*
- » *Participar en reuniones convocadas por organismos internacionales para el tratamiento de temas vinculados a la materia de su competencia;*

c. Subsecretaría de Transporte Ferroviario

La Subsecretaría de Transporte Ferroviario (STF) es la instancia sub-sectorial responsable del transporte ferroviario a nivel nacional. Esta Subsecretaría está compuesta a su vez por 4 Direcciones: Dirección de Planificación de Transporte Ferroviario; Dirección Nacional de Transporte Ferroviario; Dirección de Operación y Control de Transporte Ferroviario; y el Grupo de Trabajo de Coordinación de Transporte Ferroviario. Los principales objetivos y funciones de esta Subsecretaría son los siguientes:

- » *Intervenir en la elaboración, ejecución y control de las políticas, planes y programas referidos al transporte ferroviario, de carga y de pasajeros;*
- » *Coordinar los estudios para la actualización de la normativa vigente en lo referente a modalidades operativas, aptitud técnica de equipos, seguros, régimen tarifario y toda otra normativa vinculada con las acciones de su competencia;*
- » *Elaborar y proponer políticas sobre permisos y/o concesión de explotación de los servicios de transporte ferroviario;*
- » *Intervenir en la planificación y estructuración del transporte ferroviario en el Área Metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el área de su competencia;*
- » *Elaborar los pliegos de bases y condiciones para llamados a concurso y/o licitaciones, así como también intervenir en los procesos licitatorios, para el otorgamiento de concesiones o contrataciones, que se efectúen con motivo de las acciones vinculadas a su competencia;*

- » *Participar de las reuniones de consulta, reuniones técnicas o negociaciones con autoridades de transporte ferroviario, provinciales o de otros países;*
- » *Asistir en la supervisión respecto del funcionamiento de las empresas de cuyo capital social el estado nacional tiene participación accionaria: Ferrocarril General Belgrano Sociedad Anónima; Nuevo Central Argentino Sociedad Anónima; Ferroexpreso Pampeano Concesionaria Sociedad Anónima; Ferrosur Roca Sociedad Anónima; Ferrocarril Mesopotámico Urquiza Sociedad Anónima; Buenos Aires al Pacífico San Martín Sociedad Anónima; Belgrano cargas sociedad anónima; y*
- » *Participar en el ámbito de su competencia en todo lo atinente al fondo fiduciario federal de infraestructura regional creado por la Ley N° 24.855.*

d. Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado

La Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad del Estado (ADIFSE) tiene como visión mejorar la infraestructura ferroviaria en el marco de un Plan Federal con el fin de integrar el territorio recuperando el transporte de pasajeros y potenciando la intermodalidad de transporte de cargas. Para el efecto, la ADIFSE tiene como misión desarrollar planes, programas, proyectos y obras concretas desplegadas en 3 áreas de acción: desarrollo humano; integración productiva del territorio; e infraestructura.

e. Unidad Ejecutora Central

La Unidad Ejecutora Central (UEC) fue creada por Decreto N° 202/91, luego de sus sucesivas modificaciones (Decretos N° 1732/92, 1778/93, 1816/94, 660/96, 1410/96 y 1166/97) se dispuso que la Unidad Ejecutora Central dependiera de la Secretaría de Asistencia Financiera a las Provincias del Ministerio del Interior, que posteriormente, por Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 20 de fecha 13/12/99 pasó a denominarse Secretaría de Provincias. A través de los instrumentos legales mencionados, se garantizó la permanencia de la UEC durante la vigencia de los Programas, y la colaboración del resto de las instituciones, empresas, y organismos del Estado Nacional para la provisión de información necesaria para el desarrollo de sus actividades.

Por Decreto PEN 1045/01 del 16/08/01, la UEC pasó a la órbita de la Subsecretaría de Coordinación del Ministerio del Interior, y por Decreto 357/02, pasó a depender de la Secretaría de Coordinación Legal, Técnica y Administrativa.

Para los fines detallados, la UEC está conformada por un Consejo Consultivo Ad Honorem integrado por el Foro Federal de Ministros de Economía, Hacienda y/o Finanzas de cada una de las Provincias y el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Asimismo, la UEC cuenta con un Comité de Crédito integrado por cinco miembros: el Coordinador General, el Coordinador Ejecutivo y tres miembros del Consejo Consultivo.

f. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social

El Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social es un organismo nacional, dependiente del Poder Ejecutivo, que tiene la misión de servir a los ciudadanos en las áreas de su competencia. Es parte de la estructura administrativa gubernamental para la conformación y ejecución de las políticas públicas del trabajo y la seguridad social. Le compete al Ministerio proponer, diseñar, elaborar, administrar y fiscalizar las políticas para todas las áreas del trabajo, el empleo y las relaciones laborales, la capacitación laboral y la Seguridad Social. (BID, 2013c)

El instrumento legal para ejercer sus funciones es el Decreto N° 355/02 donde establece las áreas de acción del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social. En su Artículo 23 menciona "Compete al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social asistir al Presidente de la Nación y al Jefe de Gabinete de Ministros en orden a sus competencias, en todo lo inherente a las relaciones y condiciones individuales y colectivas de trabajo, al régimen legal de las negociaciones colectivas y de las asociaciones profesionales de trabajadores y empleadores, al empleo y la capacitación laboral, a la seguridad social". Asimismo se detalla las funciones particulares.

g. Superintendencia de Riesgo del Trabajo

El objetivo de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) es garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la salud y seguridad de la población cuando trabaja. Por ello, en base a las funciones que la Ley establece, centraliza su tarea en lograr trabajos decentes preservando la salud y seguridad de los trabajadores, promoviendo la cultura de la prevención y colaborando con los compromisos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación y de los Estados Provinciales en la erradicación del Trabajo Infantil, en la regularización del empleo y en el combate al Trabajo no Registrado.

3.7.2. Instituciones provinciales

- Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS)

Dado la ubicación geográfica de la obra que se ejecutará en el Proyecto, se deberá cumplir con las disposiciones legales ambientales emanadas de las autoridades de aplicación en el ámbito de la Provincia de Buenos Aires. A continuación se presente una breve descripción de sus funciones.

En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires la autoridad ambiental de aplicación es el Organismo Provincial para el Desarrollo Sustentable (OPDS), creado a través de la promulgación de la Ley Orgánica de los Ministerios N° 13.757 de 2007, donde se establecen sus competencias. El OPDS tiene a su cargo formular, proyectar, fiscalizar y ejecutar la política ambiental del Estado Provincial, así como la relativa a la preservación de los recursos naturales. En particular es de competencia, entre otras, el ejercicio de:

- » Fiscalizar el cumplimiento de las normas que regulan la materia ambiental;
- » Coordinar la ejecución descentralizada de las políticas ambientales con otros organismos y los municipios de la Provincia;
- » Ejercer el control de gestión sobre los organismos que tengan a su cargo cualquier aspecto de la ejecución de la política ambiental que fije el poder ejecutivo;
- » Coordinar las competencias de otros organismos en materia ambiental;
- » Establecer y fiscalizar el cumplimiento de las normas relativas a efluentes industriales en coordinación con otras carteras con competencia en la materia;
- » Ejecutar acciones de fiscalización de todos los elementos que puedan ser causa de contaminación del aire, agua, suelo, y todo lo que pudiere afectar el ambiente;
- » Intervenir en la determinación del impacto ambiental;
- » Intervenir en la determinación de los procesos de disposición de los residuos y de toda otra materia vinculada, en coordinación con otros organismos competentes en la materia;
- » Intervenir en el ejercicio del poder de policía ambiental, en concurrencia con otras autoridades de aplicación de la Ley determinada, y en forma y en modo que establezca la reglamentación.

3.7.3. Instituciones municipales

a. Municipalidad de La Plata

Deben mencionarse las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de la Municipalidad de La Plata.

En cuanto a la primera, la Municipalidad de La Plata está compuesta por su máxima autoridad, el Intendente, y las autoridades correspondientes a las siguientes áreas: *Secretaría Privada, Secretaría General, Secretaría de Gestión Pública, Secretaría de Modernización y Desarrollo Económico, Secretaría de Prevención del Riesgo, Dirección Ejecutiva de Presupuesto Participativo, Subsecretaría de Control Urbano, Delegaciones, Jefatura de Gabinete, Secretaría de Justicia de Faltas, Secretaría de Cultura, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Bienestar Social, el Ente Municipal de La Plata (Ordenanza 10.659/09), el Ente Municipal para la Actividad Turística (EMATur), el Consorcio de Gestión Puerto La Plata, el Mercado Regional La Plata, la Unidad Ejecutora Agencia Ambiental, la Agencia Platense de Recaudación, Secretaría de Gestión Integral de Residuos y Mantenimiento Urbano, Secretaría de Economía, Secretaría de Salud y Medicina Social, Secretaría de Fortalecimiento Institucional y Comunitario, Subsecretaría de Servicios Públicos y Relaciones de*

Consumo, Subsecretaría de Derechos Humanos, Secretaría de Gobierno y el Consejo de Planificación de Políticas, Producción y Empleo Regional.

En relación a la segunda, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de La Plata tiene por responsabilidad la sanción de las Ordenanzas y Decretos que rigen dentro del Partido. Funciona en el Palacio Municipal, y se compone veinticuatro concejales (Artículo 284° de la Ley Orgánica de las Municipalidades), elegidos por el voto popular, por un período de cuatro años, y se renueva por mitades cada dos años y podrán ser reelectos.

Los proyectos y solicitudes que presenten los Concejales pueden ser de las siguientes formas: ordenanzas, decretos, resoluciones o comunicaciones. En cuanto a la primera, tienen forma de Ordenanza aquellos proyectos que dispongan la creación, modificación o derogación de normas de carácter general, cuyo cumplimiento competa al Departamento Ejecutivo y/o a los particulares; mientras que los decretos refieren a toda proposición que tenga por objeto normas para el funcionamiento interno del Concejo, las autorizaciones y acuerdos que el Cuerpo preste a actos del Departamento Ejecutivo de acuerdo a las prescripciones legales.

b. Municipalidad de Ensenada

Deben mencionarse además las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo de la Municipalidad de Ensenada.

En cuanto a la primera, la Municipalidad de Ensenada está compuesta por su máxima autoridad, el Intendente, y las autoridades correspondientes a las siguientes áreas: *Secretaría de Seguridad y Justicia, Secretaría de Relaciones Institucionales Prensa y Ceremonial, Secretaría de Salud y Medio Ambiente, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Hacienda, Secretaría de Obras Públicas, Secretaría de Servicios Públicos, Secretaría de Gobierno, y la Secretaría Privada.*

En relación a la segunda, el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Ensenada tiene por responsabilidad la sanción de las Ordenanzas y Decretos que rigen dentro del Partido. Se compone dieciocho concejales (Artículo 2° del Cap. 1 de la Ley Orgánica de las Municipalidades), elegidos por el voto popular, por un período de cuatro años, y se renueva por mitades cada dos años y podrán ser reelectos.

3.7.4. La Unidad Ejecutora Central (UEC) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID)

A partir del acuerdo entre el Ministerio del Interior y Transporte y el BID, la UEC tiene por responsabilidad la ejecución y coordinación del PRFM a ser financiado con recursos de la Línea de Crédito CCLIP.

De acuerdo a las Políticas del BID, este Proyecto ha sido categorizado como de "Categoría B" por la Unidad de Salvaguardas Ambientales. Su ejecución activa

determinadas Políticas Ambientales y Sociales del Banco, a ser tenidas en cuenta en el EIAyS. Dichas Políticas son las siguientes:

i) Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-703)

El objetivo de esta Política es impulsar la misión del BID en América Latina y el Caribe para lograr un crecimiento económico sostenible y para cumplir objetivos de reducción de pobreza consistentes con la sostenibilidad ambiental de largo plazo. Los objetivos específicos de la Política son: *(i) potenciar la generación de beneficios de desarrollo de largo plazo para los países miembros, a través de resultados y metas de sostenibilidad ambiental en todas las operaciones y actividades del Banco y a través del fortalecimiento de las capacidades de gestión ambiental de los países miembros prestatarios, (ii) asegurar que todas las operaciones y actividades del Banco sean ambientalmente sostenibles, conforme lo establecen las directrices establecidas en la presente Política y (iii) incentivar la responsabilidad ambiental corporativa dentro del Banco mismo.*

Dentro de esta Política, para este caso se activan las siguientes Directivas: *B.1) Políticas del Banco; B.2) Legislación y Regulaciones Nacionales; B.3) Preevaluación y Clasificación; B.4) Otros factores de riesgo; B.5) Requisitos de evaluación ambiental; B.6) Consultas; B.7) Supervisión y cumplimiento; B.9) Hábitats naturales y sitios culturales; B.11) Prevención y reducción de la contaminación.*

ii) Política de Acceso a la Información (OP-102)

Mediante la aplicación de esta política el Banco quiere demostrar el uso transparente que hace de los fondos públicos y, al estrechar sus relaciones con los interesados, mejorar la calidad de sus operaciones y actividades de conocimiento y fortalecimiento de capacidad. La política se aplicará a la información generada por el BID y a cierta información en su poder, con sujeción a una lista de excepciones.

iii) Política de Gestión del Riesgo de Desastres Naturales (OP-704)

La política del BID sobre gestión del riesgo de desastres tiene por propósito orientar la acción de la institución para asistir a sus prestatarios en la reducción de riesgos derivados de amenazas naturales y en la gestión de desastres, a fin de favorecer el logro de sus objetivos de desarrollo económico y social.

La política tiene dos objetivos específicos, que están relacionados entre sí:

- Dar mayor eficacia al BID en la tarea de ayudar a sus prestatarios a realizar una gestión sistemática de los riesgos relacionados con amenazas naturales mediante la determinación de esos riesgos, la reducción de la vulnerabilidad y la prevención y mitigación de los consiguientes desastres antes de que ocurran.
- Facilitar la prestación de asistencia rápida y adecuada del BID a sus países miembros prestatarios en casos de desastre, en un esfuerzo por revitalizar eficientemente sus iniciativas de desarrollo y evitar que se vuelva a crear una situación de vulnerabilidad.

iv) Política de Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-761)

La presente política operativa (GN-2531-10) toma en consideración la experiencia del BID en su apoyo a la integración de las mujeres como líderes, participantes y beneficiarias del desarrollo; refleja los avances en el estatus de la mujer y la igualdad de género ocurridos en la región, así como los desafíos emergentes; integra una perspectiva de género que busca que mujeres y hombres tengan las mismas condiciones y oportunidades para alcanzar su potencialidad en términos sociales, económicos, políticos y culturales; y acuerda mecanismos concretos para asegurar su aplicación efectiva y la evaluación de sus resultados.

El objetivo de la Política es fortalecer la respuesta del BID a los objetivos y compromisos de sus países miembros en América Latina y el Caribe de promover la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. La Política identifica dos líneas de acción: 1) *la acción proactiva, que promueve activamente la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer a través de todas las intervenciones de desarrollo del Banco; y 2) la acción preventiva, que integra salvaguardias a fin de prevenir o mitigar los impactos negativos sobre mujeres u hombres por razones de género, como resultado de la acción del Banco a través de sus operaciones financieras.*

v) Política de Reasentamiento Involuntario (OP-710)

Esta política abarca todo desplazamiento físico involuntario de personas causado por un proyecto del BID. Se aplica a todas las operaciones financiadas por el mismo, tanto del sector público como del privado, en las cuales el financiamiento del BID esté encauzado directamente (como en el caso de los préstamos de inversión) o sea administrado por intermediarios (programas de obras múltiples, por etapas o de crédito multisectorial). Excluye los planes de colonización así como el asentamiento de refugiados o víctimas de desastres naturales.

El objetivo de la política es minimizar alteraciones perjudiciales en el modo de vida de las personas que viven en la zona de influencia del proyecto, evitando o disminuyendo la necesidad de desplazamiento físico, y asegurando que, en caso de ser necesario el desplazamiento, las personas sean tratadas de manera equitativa y, cuando sea factible, participen de los beneficios que ofrece el proyecto que requiere su reasentamiento.